

**VOCES RESILIENTES: JUVENTUDES,
REALIDADES Y TERRITORIOS,
DE MARTHA LUCÍA GUTIÉRREZ BONILLA,
MATEO ORTIZ-HERNÁNDEZ, NATALIA REYES-
FERNÁNDEZ Y JUAN RAÚL ESCOBAR-
MARTÍNEZ (EDITORES ACADÉMICOS)**

PATRICIO IBÁÑEZ GONZÁLEZ¹

RESUMEN

El libro evidencia y analiza la realidad de las juventudes en Colombia. A partir de un amplio estudio, sus resultados dan cuenta de desigualdades en educación, empleo, salud, tiempo libre, medio ambiente y participación. Aunque expresaron resiliencia y compromiso social, sus trayectorias estuvieron marcadas por límites en la educación y la movilidad social, precariedad laboral, brechas de género, discriminación étnica, barreras en salud mental y baja confianza institucional. Los hallazgos evidenciaron tensiones entre percepciones optimistas y restricciones en sus condiciones materiales, destacando la urgencia de políticas inclusivas y diferenciadas, según contextos y territorios, que garanticen derechos, bienestar y participación efectiva en la construcción de un futuro común.

RECIBIDO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACEPTADO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025

¹ Integrante del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Sociales, mención en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. Licenciado y Trabajador Social, Universidad Tecnológica Metropolitana. Encargado Académico Programa Propedéutico y Profesional PACE, Universidad Tecnológica Metropolitana. Correo electrónico: patricio.ibanez@utem.cl

INTRODUCCIÓN

La presente reseña pretende abordar los principales elementos, hallazgos y conclusiones referidos en el libro *Voces resilientes: juventudes, realidades y territorios* respecto a un amplio estudio realizado sobre las juventudes en Colombia en 2023, representado en diferentes artículos investigativos divididos por temáticas en los que sus autoras y autores² analizan temas como educación, trabajo, tiempo libre, ciudadanía, discriminación, medioambiente y salud como los elementos centrales.

Inicialmente, este estudio abordó once temas de interés en 5.465 jóvenes encuestados, cuyo objetivo central fue analizar las condiciones de vida, necesidades y brechas de jóvenes colombianos, calculando una muestra de treinta municipios vinculados al Programa Jóvenes Resilientes, representando a más de cuatro millones de jóvenes de los treinta municipios estudiados. Esto, desde una perspectiva interseccional con representatividad por sexo, subgrupos de edad, ubicación territorial (rural-urbana), grupos socioeconómicos y grupos con pertenencia étnica. Adicionalmente, se realizaron grupos focales en algunas localidades de Colombia con el objetivo de profundizar sobre algunos resultados.

Estas encuestas constituyeron un instrumento clave para comprender la sociedad desde una mirada amplia y, al mismo tiempo, para focalizar el análisis en grupos específicos como las juventudes. Permitieron identificar problemas persistentes y fenómenos emergentes, así como comparar contextos, generaciones y períodos históricos. Su relevancia radicó en ofrecer evidencias que orienten decisiones públicas, midan avances sociales y revelen aspectos poco

² Quienes aportaron en la realización de este libro fueron Carolina Buitrago-Ávila, Felipe Arenas, Gabriela Reyes, Juan Raúl Escobar-Martínez, María Camila Saavedra, Marina Andrea Tatis Sosa, Martha Lucía Gutiérrez-Bonilla, Mateo Ortiz-Hernández, Natalia Reyes-Fernández, Ricardo Silva Ramírez y Sebastián Carreño.

explorados de la realidad, fortaleciendo con ello la conciencia colectiva y el diseño de políticas a partir de datos actualizados.

En el campo de los estudios sobre juventudes, estos resultados se muestran esenciales para reconocer realidades particulares. Durante los últimos años, las juventudes han tenido un papel central en la vida política y social de Colombia, especialmente durante el estallido social en 2021, cuando se consolidaron como actores que cuestionaron el orden político, económico y social. Este proceso se relacionó con las movilizaciones juveniles vistas en varios países latinoamericanos, en escenarios marcados por políticas restrictivas, cuestionamientos al orden político y la creciente privatización de derechos sociales.

En los últimos años se desarrollaron diversas investigaciones que profundizaron en múltiples dimensiones la experiencia juvenil en Colombia. *Next Generation Colombia: amplificando la voz de los jóvenes* abordó temas como la confianza, el capital social, la participación política, la educación, el empleo, el tiempo libre, la violencia, la salud mental y los sueños de los jóvenes. Por su parte, *¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia?*, de la Universidad del Rosario y otras entidades, exploró el clima político y social en relación con hitos nacionales como elecciones presidenciales y regionales. Finalmente, *Juventudes colombianas 2021: preocupaciones, intereses y creencias* entregó información clave sobre empleo y educación, además de percepciones sobre religión, trascendencia, migración y el acuerdo de paz con las FARC-EP (Gutiérrez Bonilla et al., 2025).

Por tanto, a partir de esta nueva investigación, los resultados dan cuenta de la realidad colombiana organizándose en tres capítulos: trayectorias y proyectos de vida; ciudadanías y discriminación; y jóvenes, medio ambiente y salud. El estudio *Voces resilientes* constituye un llamado a la acción al visibilizar tanto las brechas y vulnerabilidades como las fortalezas y apuestas de

transformación de las juventudes colombianas, resaltando su diversidad más allá de una visión homogénea y la necesidad de construir una sociedad que reconozca y garantice dicha diversidad.

A continuación, se presentan las reseñas de cada ítem mencionado, analizando desde una visión crítica los desafíos de las juventudes colombianas.

1. TRAYECTORIAS Y PROYECTOS DE VIDA JUVENILES: EDUCACIÓN, TRABAJO, MOTIVACIONES Y TIEMPO LIBRE

Para comenzar, los autores Mateo Ortiz-Hernández, Gabriela Reyes Rubiano y Felipe Arenas Quintero analizan críticamente en el artículo “Educar para transformar: el derecho a la educación en perspectiva” la manera en que se concibe la relación entre juventud, educación y trabajo en Colombia. Plantean el vínculo entre juventud y el concepto de “moratoria social”, es decir, un periodo en el que se posponen responsabilidades familiares y laborales para dedicarse a estudiar y prepararse para el mundo laboral. Asociando este enfoque reduccionista a la educación únicamente solo como puente de futura inserción laboral, lo que invisibiliza la diversidad de trayectorias juveniles y legitima discursos de estigmatización hacia quienes no encajan en ese modelo, los llamados *jóvenes ninis*. En ese sentido, el capítulo propone repensar la educación como un derecho integral y no solo como un medio para el empleo, problematizando el verdadero sentido de la educación.

En cuanto a la radiografía educativa, los resultados muestran que el 60% de las juventudes se dedica al estudio, incluyendo quienes combinaban estudio y trabajo. A la par, aumentó el número de jóvenes, sobre todo mujeres, cuya principal ocupación eran labores domésticas y de cuidado (12% en 2023 frente a 3% en 2021). Aunque el 59% estaba matriculado en algún nivel educativo, las brechas socioeconómicas seguían marcando diferencias: mientras el 41% de

jóvenes de estratos altos accedía a la universidad, en los estratos bajos no superaba el 17%. La mayoría se concentra en la educación media (42,9%), y solo un 16,9% logra completar estudios superiores, planteando desigualdades de clase y estratos socioeconómicos.

Sobre las motivaciones para continuar estudios, predomina la motivación intrínseca, vinculada al disfrute personal (28,7%) y al interés por seguir una carrera técnica, tecnológica o profesional (27,6%). No obstante, también se destaca el peso de factores extrínsecos, como la búsqueda de empleo (26,3%). Estas motivaciones varían según los contextos: en territorios con presencia de juventudes negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), así como en sectores socioeconómicos bajos, predomina la motivación económica, lo que refleja la presión por mejorar sus condiciones materiales y expectativas de movilidad social ascendente.

En relación con la calidad educativa, el 78,2% valora positivamente la educación recibida, principalmente por su aporte a la autonomía y la preparación para el futuro laboral. Sin embargo, se percibe un menor impacto en la comprensión de la realidad social y política. Aunque el 73,6% considera que accedía a una educación de calidad, señalan déficits en infraestructura, actividades extracurriculares y vínculos interinstitucionales. En contraste, destacan la labor docente, los planes de estudio y las relaciones entre pares. Estas percepciones, nuevamente, están atravesadas por el nivel socioeconómico y el territorio, acentuando las brechas entre jóvenes de estratos altos y bajos.

El tránsito a la educación superior aparece como un punto crítico. Solo el 3% manifiesta no querer continuar estudios, pero las razones para ingresar cambiaron respecto a 2021: la vocación pierde fuerza, mientras que predomina el interés por mejorar oportunidades laborales (37,1%) o consolidar un proyecto de vida (33,5%). Las principales causas de deserción son los costos económicos (30%), la necesidad de trabajar (16%) y la percepción de haber alcanzado el nivel

formativo necesario (10%). Además, un 41,9% ha tenido que salir de su municipio por falta de oferta, evidenciando la urgencia de territorializar la educación superior en lugares que tienen menor acceso.

Las responsabilidades tempranas afectan de manera desigual: un 24% de mujeres, un 33% de jóvenes rurales y un 28% de víctimas del conflicto abandonan sus estudios por tareas de cuidado, lo que muestra que garantizar el derecho a la educación no dependía solo de becas o apoyos financieros, sino también de condiciones de permanencia para aquellos grupos que más lo requieren.

Por último, los autores plantean la necesidad de una resemantización de la educación, que no se redujera a la preparación laboral, sino entendida como un derecho integral. Esto implica equilibrar motivaciones vocacionales y económicas, fortalecer la calidad educativa de manera holística —desde la infraestructura hasta la inclusión de actividades extracurriculares— y reconocer las brechas vinculadas al género, la condición socioeconómica y el territorio. Sobre esto, los resultados dejan una afirmación y una inquietud: las juventudes colombianas desean estudiar, pero ¿existen las condiciones para ello?

Ahora bien, respecto al desarrollo de las juventudes y el mercado del trabajo, las autoras Natalia Reyes-Fernández y María Camila Saavedra, de “Desafíos y oportunidades para la inserción laboral de las juventudes”, sitúan la inserción laboral juvenil como un nudo crítico de las trayectorias de vida, destacando la informalidad, el subempleo y la inactividad como mayor afectación a las juventudes colombianas, agudizándose con la mayor tasa regional de desempleo juvenil entre personas con educación superior y altos niveles de informalidad. Esa realidad desborda la promesa de la “moratoria”—estudiar hoy para trabajar mañana— y erosiona tanto la movilidad social como la sostenibilidad de la protección social dada la poca seguridad y proyección laboral postestudios.

A partir de los resultados de la encuesta, se describen ingresos bajos y muy desiguales. Más del 60% percibe menos de un millón de pesos colombianos (cerca de 200 dólares a la fecha de los datos); entre 14-18 años, casi la mitad recibía menos de 250.000 pesos colombianos. También se observa una brecha de género con un 15% de hombres que supera los \$2 millones frente al 7% de mujeres; así mismo, un 68% de ellas gana menos del mínimo (58% en hombres). Por estrato, el 68% del grupo socioeconómico (en adelante GSE) de nivel bajo está en menos de \$1 millón, mientras en el GSE alto solo 17%; allí, 30% superaba \$4 millones. Las brechas étnicas y territoriales son severas: 87% de palenqueros y 84% de afrodescendientes estaban bajo \$1 millón, y en municipios como Cáceres, Quibdó, Tumaco o Bojayá esa condición supera el 90%. El 35,8% no tiene ingresos y solo 32,7% reporta trabajo propio como fuente principal (10% trabajaba en 14-18; 50% en 25-28).

La inserción laboral de las juventudes revela un panorama marcado por la precariedad y las desigualdades. Un 32% estudia y un 18,9% trabaja, aunque sumando labores de cuidado y domésticas, más de la mitad realiza algún tipo de trabajo. Las mujeres asumen mayor carga no remunerada (19% frente a 2% en hombres). La búsqueda de empleo es larga y depende de redes cercanas, con barreras como la exigencia de experiencia, que afecta más a las mujeres. Aunque solo el 38,9% trabaja, la mayoría en condiciones precarias, un 71,5% expresa interés en emprender, principalmente como alternativa a la realidad laboral precaria.

Por último, para cerrar este apartado, en el artículo “Uso del tiempo libre”, Juan Raúl Escobar-Martínez y Ricardo Silva nos señalan la importancia de esta actividad como un recurso fundamental para el bienestar juvenil, aunque condicionado por factores como el estudio, el trabajo y las responsabilidades de cuidado. Los autores muestran que internet ocupa un rol central con el 95% de jóvenes que se conectan diariamente, principalmente desde sus teléfonos móviles, usando las redes para socializar, entretenerte y, en menor medida, para fines

educativos o laborales. Esta práctica refuerza el peso de lo digital en la vida cotidiana y en la construcción de identidades juveniles.

Respecto a las actividades, escuchar música, reunirse con amigos, leer y asistir a eventos deportivos son las más frecuentes, mientras que el voluntariado, los viajes y las prácticas artísticas se mantienen como aspiraciones limitadas por factores económicos. La lectura alcanza mayores niveles en zonas urbanas (35%) y en municipios como Quibdó y Barranquilla, mientras que el deporte se practica principalmente entre los hombres. A la par, las labores domésticas tienen un peso notable con un 41% en limpieza y 28% en cocina, con una clara sobrecarga en las mujeres (49% frente al 26% de hombres), profundizando brechas de género.

Las desigualdades son un eje transversal. Jóvenes indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas rurales, reportan mayor falta de infraestructura y oportunidades, con un 59% de ellos que afirman no tener espacios adecuados para el ocio, frente al 40% en áreas urbanas. Las limitaciones económicas también marcan diferencias profundas, con un 42% de las y los jóvenes de estratos bajos que declaran no poder viajar, frente a un 14% en los estratos altos.

Respecto a lo señalado en este ítem, el tiempo libre se revela como un ámbito clave para el desarrollo de habilidades, la salud mental y la construcción de ciudadanía juvenil. Sin embargo, su acceso está atravesado por brechas socioeconómicas, de género, territoriales y étnicas, sosteniendo que el tiempo libre está disponible para unos por sobre otros, requiriendo cambios urgentes en la estructura social, materializándolo en políticas públicas inclusivas que reconozcan la diversidad de lo juvenil y garanticen igualdad de oportunidades en la recreación, la cultura y el ocio.

2. CIUDADANÍA JUVENIL, DISCRIMINACIÓN, LIBERTAD Y PROYECTO DE VIDA

Para iniciar este punto, desde el artículo “Desafíos y anhelos: ciudadanía juvenil en construcción”, Juan Raúl Escobar-Martínez y Sebastián Carreño destacan la participación juvenil como pilar de la ciudadanía en Colombia, enmarcada en hitos recientes como el Paro Nacional de 2021 y las elecciones de 2022. Mostrando que las juventudes pasaron de ser vistas como sujetos pasivos a convertirse en actores políticos relevantes, aunque bajo el marco de la estigmatización y criminalización.

Uno de los ejes fue la migración, donde se evidencia un trato ambivalente con un 53,9% que percibe actitudes negativas como miedo o desconfianza, mientras que el 82,8% reporta respeto y solidaridad. Las percepciones varían según estrato y territorio, mostrando cómo los contextos locales influyen en la integración o la hostilidad.

Sobre la confianza institucional, los hallazgos son críticos. Más del 80% desconoce los Consejos Municipales de Juventud y apenas un 8% sabe de la Comisión de Concertación y Decisión. La confianza en instituciones públicas no supera el 17%, y los medios de comunicación perdieron legitimidad con un 19,6%. Por otra parte, un 64,5% de las y los jóvenes señalaron que sus ideas no son tomadas en cuenta y un 29,4% justifica el uso de la violencia por causas justas.

En cuanto al subsistema de participación, el voto es la acción principal, sobre todo en elecciones locales (36,9%) y educativas (51%), mientras que los Consejos de Juventud siguen siendo espacios marginales y sin mayor relevancia. Por otra parte, las protestas (17,2%) emergen como vía inmediata de incidencia, reflejando desconfianza hacia los canales institucionales, aunque no con sostenida masividad. La participación está marcada por diferencias de edad, estrato social y etnia; los jóvenes de 19 a 24 años se inclinan más por protestas y

asambleas, mientras que los estratos medios tienen mayor protagonismo en organizaciones sociales y políticas.

Aunque las juventudes reconocen un rol activo en la paz y la memoria locales, más del 60% percibe poco respeto por la legalidad y los derechos humanos. Los autores concluyen que existe una fuerte voluntad de participación juvenil, pero limitada por la desconfianza, la falta de educación ciudadana y el miedo a la violencia, lo que exige fortalecer el subsistema de participación juvenil y generar entornos seguros para una democracia inclusiva.

Respecto al escrito “Discriminación, libertad y proyecto de vida”, Mateo Ortiz-Hernández, Felipe Arenas-Quintero y Gabriela Reyes-Rubiano abordan cómo las juventudes colombianas perciben y viven estas tres dimensiones fundamentales de su existencia. Resaltan que, aunque la Constitución y la Corte Constitucional garantizan la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, en la práctica persisten desigualdades atravesadas por clase, género, etnia y edad, que configuran experiencias diferenciadas de exclusión y posibilidades desiguales para construir proyectos de vida.

En relación con la discriminación, los resultados generales son bajos, pero los motivos más señalados son la apariencia física (6,2%), la edad (4,8%) y el estrato social (4,6%). Las mujeres reportan más discriminación por apariencia y edad, mientras que los hombres lo hacen por estrato social. Los grupos étnicos muestran mayores niveles, con un 13,4% en indígenas y 8% en afrodescendientes. Las juventudes víctimas del conflicto armado registran las cifras más altas, especialmente por desplazamiento forzado, lo que evidencia procesos de exclusión y revictimización. Los espacios más mencionados donde se sitúa la discriminación son las instituciones educativas (36,1%), el transporte (26,2%) y el trabajo (24,4%), con un peso mayor en lo educativo para los adolescentes y en lo laboral para los jóvenes trabajadores.

Respecto a la libertad, se observa un giro significativo: mientras en 2021 predominaba la idea de que tenían menos libertades, en esta encuesta el 55,3% opinó que gozan de más de las que deberían. Este cambio se relaciona con discursos conservadores que asocian la libertad juvenil con libertinaje. Las percepciones son más críticas en estratos bajos, en víctimas del conflicto armado y en grupos étnicos. En el caso de las mujeres jóvenes, un 16,1% considera que tienen menos libertad de la que deben, el doble que en la población general, reflejando tensiones entre percepción social y las limitaciones materiales que restringen su autonomía desde las brechas de género.

En cuanto al proyecto de vida, un 56% de jóvenes considera que era favorable desarrollarlo en el país, aunque esta percepción cae en mujeres, personas con discapacidad y víctimas del conflicto. Las desigualdades materiales marcan la diferencia, dado que más del 88% no supera el millón de pesos de ingresos, más de la mitad tiene múltiples empleos y un 56,6% trabaja en áreas distintas a su formación. Además, las mujeres enfrentan mayores barreras por la carga de cuidados y la brecha salarial. Todo lo anterior, vinculado al primer apartado de esta reseña y el estudio en educación y trabajo.

Por tanto, se evidencia que, pese a una percepción general de optimismo, persisten discriminaciones estructurales, desigualdades socioeconómicas y tensiones entre libertad percibida y condiciones materiales reales, planteando la necesidad de cambios estructurales en la reproducción de la vida, traduciéndose en políticas que reconozcan la diversidad de experiencias juveniles, desmonten estigmas y fortalezcan las oportunidades para concretar proyectos de vida dignos.

3. SOBRE JÓVENES, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

En el escrito “El medio ambiente en la vida de las y los jóvenes: problemas, responsabilidades y oportunidades”, de Natalia Reyes-Fernández y Marina Tatis, las autoras analizan cómo las juventudes colombianas perciben los impactos ambientales en sus territorios y las oportunidades que estos generan para redefinir sus proyectos de vida.

En cuanto a los problemas ambientales, la encuesta muestra que el 59% de los jóvenes identifica la contaminación del aire y la mala disposición de residuos como los principales, seguidos por el ruido (28%), los malos olores (26%) y la contaminación del agua (19%). Mientras que en áreas urbanas prevalece la preocupación por el aire, en las rurales se destaca la basura, y entre las juventudes indígenas son centrales el agua (30%) y la deforestación (17%). Ahora bien, en contraste a lo anterior y frente a las soluciones, el 45% prioriza la educación ambiental como estrategia clave, seguida de sanciones (31%), mientras que los estratos sociales altos valoran más la investigación y los incentivos empresariales.

Sobre las responsabilidades en estos temas, el 67% señala a la ciudadanía como principal garante del cuidado ambiental, seguido por el Estado (13%) y los propios jóvenes (9%). No obstante, los participantes subrayan la insuficiencia de las acciones gubernamentales, lo que refuerza sensaciones de desconfianza y abandono. Estas percepciones varían según territorio, dado que en municipios como Turbo y Apartadó se atribuye más peso a las y los jóvenes, mientras que en Corinto el 33% responsabiliza al Gobierno.

Con relación a las oportunidades, aunque menos del 5% elige carreras ambientales como opción de estudio, crecen los intereses en juventudes indígenas, rurales y víctimas del conflicto armado. La pertenencia a organizaciones ambientales (5%) es más alta que en otras de carácter cultural o político, con

mayor protagonismo de mujeres, estratos medios y grupos étnicos. En el ámbito laboral, las y los jóvenes priorizan sectores como el turismo ecológico, la agricultura sostenible, las huertas urbanas (14%) y la reutilización de residuos (9%), vistos como alternativas para mejorar la calidad de vida y generar arraigo territorial.

En última instancia, se concluye que las juventudes identifican de forma clara los problemas ambientales y la valoran de la educación como herramienta de cambio, reconociendo también que la sostenibilidad exige un esfuerzo colectivo entre la ciudadanía, el Estado y el mercado. El medio ambiente se consolida, así, como un espacio de riesgo, pero también de oportunidad para construir proyectos juveniles con sentido de justicia social y cuidado territorial.

Por último, en el artículo elaborado por Martha Lucía Gutiérrez-Bonilla y Carolina Buitrago-Ávila, “Aproximación a la salud de las juventudes, las autoras sitúan a la salud juvenil como un bienestar integral —físico, mental, social y emocional— y no solo como ausencia de enfermedad. Desde esta mirada, los tres frentes que concentran los hallazgos fueron la salud mental, la salud sexual y reproductiva, y el consumo de sustancias psicoactivas (en adelante SPA).

A partir de los resultados de la encuesta en el ítem de salud mental, prevalece una autoevaluación positiva (58,4% buena; 21,2% muy buena) y rasgos de resiliencia (92,5%), aun así, las dificultades son notorias. La ansiedad y nerviosismo con un 34,8%, la angustia con un 34,1% y la depresión con el 28,6%, con mayor afectación en mujeres, estratos bajos y pueblos originarios, y más presencia en áreas urbanas. Por otra parte, la ideación suicida alcanza el 12,3%. Más de la mitad no busca ayuda por desconfianza, estigma o sensación de inutilidad, mientras quienes sí lo hacen, acuden sobre todo a profesionales y familia. Así mismo, la pandemia dejó secuelas persistentes: alrededor de uno de cada cuatro reportó agobio, ansiedad, tristeza o depresión, irritabilidad, problemas de sueño y soledad.

En cuanto a la salud sexual y reproductiva: más de la mitad tiene vida sexual activa, el uso constante de métodos anticonceptivos llega al 58%, con mayor regularidad en adolescentes y mujeres. El uso de condón es el método más usado, seguido de implantes e inyecciones, aun cuando persisten barreras de acceso y creencias negativas.

Por otra parte, cerca del 39% tiene hijos, concentrado en mujeres, rurales, indígenas y estratos bajos, con efectos en deserción escolar, sobrecarga de cuidados e inserción laboral precaria.

En cuanto al consumo de SPA, el alcohol lidera (más de la mitad lo había probado y un tercio de los consultados lo consumió recientemente), seguido por bebidas energizantes y cigarrillos o derivados y el consumo de marihuana alcanza un 14%. Sobre el consumo de marihuana, los motivos principales son por relajación (41,9%) y alegría (23,8%), mientras que un 15% lo vincula con estudio y/o trabajo. Aunque un 84% no reporta problemas cotidianos, existen impactos diferenciados por grupos.

Por último, ante los resultados, urge fortalecer la salud mental en las juventudes, avanzar en reducción de riesgos (alcohol, vapeo, energizantes) y fortalecer el consumo responsable, ampliar acceso gratuito a anticonceptivos con corresponsabilidad de género y sostener redes de apoyo y servicios oportunos, lo anterior dejando fuera discriminación y estigma.

4. REFLEXIONES FINALES

Para ir cerrando, me permito destacar el amplio e importante aporte en términos de cifras, datos y elementos que la encuesta —y quienes participaron en su implementación— logra exponer, demostrando las realidades que viven las juventudes colombianas, a propósito de temas urgentes que como sociedad necesitamos abordar. A mi entender, ese es el sentido de la investigación: investigar para proponer y proponer para transformar.

Asimismo, relevo la importancia de replicar estudios con y para las juventudes en distintos países de América Latina, adaptados a cada contexto, con el fin de comprender las experiencias de millones de jóvenes que configuran la sociedad del siglo XXI y proyectar horizontes de presente y futuro.

Como señalan sus autores, el estudio evidencia que los y las jóvenes no solo aspiran a mejores condiciones de vida, sino que también están dispuestos a cooperar en su construcción, demandando al Estado la responsabilidad de garantizar dotaciones, oportunidades y acciones concretas para impulsar cambios sostenidos. Este constituye, sin duda, uno de los mayores valores de las juventudes colombianas.

También, me parece especialmente desafiante la reflexión planteada en el primer capítulo, que interpela el verdadero sentido de la educación. Como señalan sus autores, conforme más precarizado sea el contexto, mayor será la percepción de la persona joven sobre la educación como un mecanismo para la movilidad social, en esa lógica, es una limitante importante el solo observar la educación como movilizador social y no en su integridad y profundidad. Se enfatiza la necesidad de una educación orientada al *para qué*, que forme para compartir conocimientos, transformar la realidad y ampliar oportunidades, y no solo como un instrumento de credencialización técnica o profesional para acceder al mercado laboral. En consecuencia, se plantea el desafío de garantizar el derecho al trabajo digno y a la ocupación, tanto para quienes acceden a la

educación superior como para quienes no, asegurando que existan oportunidades reales para todos y todas. La educación debe avanzar en problematizar y socializar sus verdaderos sentidos, fortalecer las condiciones materiales de sus instituciones y entregar herramientas y facilidades a quienes no tienen acceso ni permanencia asegurada.

Sobre el mercado laboral y la inserción juvenil es fundamental generar y garantizar las condiciones necesarias, pues hoy se invita a ser parte activa del mercado laboral a través de credenciales —aludiendo incluso a la movilidad social—, pero estas trayectorias no tienen seguridad. Es relevante lograr la inserción efectiva de las y los jóvenes en empleos dignos, en miras de una reestructuración del desarrollo productivo y la reproducción de la vida, donde la estructura social a partir de sus mecanismos de organización —como el Estado— debe proveer de seguridad laboral y condiciones favorables en todos sus niveles y dimensiones.

En coherencia con los elementos anteriores, tal como señalan los autores, resulta fundamental avanzar en la construcción de un sistema integral de cuidados que, de manera transversal, garantice el acceso equitativo al empleo, la educación y el derecho al tiempo libre para quienes asumen estas responsabilidades, especialmente las mujeres jóvenes.

El limitado conocimiento que las juventudes encuestadas demostraron sobre los mecanismos formales de participación política en Colombia evidencia la necesidad urgente de fortalecer el Sistema Nacional de Juventud y de acercar estas instancias a su vida cotidiana. No obstante, más allá de promover la utilización de los canales ya existentes, resulta clave que las y los jóvenes construyan sus propios espacios de deliberación y decisión, con voz y voto, que logren incidir autónoma y efectivamente en el ámbito social y político de sus territorios. Esta exigencia cobra aún mayor relevancia frente a la crisis de legitimidad del Estado, evidenciada tanto en la encuesta como en los recientes

procesos de movilización social, que han puesto de relieve el distanciamiento entre las instituciones y la ciudadanía juvenil.

A partir de los datos expuestos, la problematización que realizan las juventudes colombianas en torno al medio ambiente resulta categórica: se requiere avanzar hacia una sociedad que garantice territorios en equilibrio con la naturaleza y el cuidado. En un contexto marcado por la crisis climática, donde los grandes capitales locales y globales han deteriorado progresivamente los ecosistemas, las juventudes han puesto el acento en la urgencia de atender estas problemáticas. Su participación y deliberación podría impulsar soluciones transformadoras, pero ello demanda un cambio estructural impostergable.

Respecto a la crisis de salud mental, se requiere un abordaje transversal que supere las respuestas fragmentadas. Coincido con los autores en la necesidad de avanzar hacia procesos de autonomía y libertades, pero resulta igualmente imprescindible transformar la matriz social y las formas de reproducción de la vida. Ello implica garantizar tiempo libre, ampliar derechos sociales, reducir de manera sostenida la precariedad laboral hasta su erradicación y replantear la educación como un eje movilizador orientado al bienestar colectivo.

Por último, podrá parecer reiterativo, pero el papel central de la educación —formal, no formal, popular y en todas sus expresiones— resulta elemental para la promoción del bienestar emocional, la educación sexual integral y el consumo responsable de sustancias. Avanzar en educación, junto con mejoras en las condiciones materiales, abre la posibilidad de impulsar cambios culturales significativos. En este ámbito, las juventudes han dado lecciones claras y muestras de interés, reafirmando el rol decisivo que la educación desempeña en esta disputa constante de fuerzas sociales.

REFERENCIAS

Gutiérrez Bonilla, M. L., Ortiz-Hernández, M., Reyes-Fernández, N., & Escobar-Martínez, J. R. (Eds.). (2025). *Voces resilientes: juventudes, realidades y territorios. Encuesta de juventud 2023*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.